

Díaz retoma el conflicto del salario mínimo



LA ESQUINA
Miguel Valverde
mvalverde@expansion.com
#MiguelValverde4

La vicepresidenta Tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha emprendido un nuevo intento para subir este año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Está esperando a que los expertos que ella y los sindicatos nombraron en su día terminen el informe que les encargó sobre la posibilidad de subir esta renta, y en qué cuantía, en medio de una crisis económica como la actual. Hay que recordar que CEOE y Cepyme se salieron de esa comisión, porque rechazaron un nuevo incremento del salario mínimo en las actuales circunstancias para las empresas.

En el conjunto de la economía, la renta que decide el Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, afecta directamente a 1,2 millones de trabajadores. En general, son trabajadores de poca cualificación, como los eventuales del campo, empleadas del hogar y muchos

trabajadores de las empresas multiservicios. De limpieza, auxiliares, seguridad y otras actividades.

En realidad, una buena parte del salario base, con jornada completa, de los convenios colectivos, es más alto que el Salario Mínimo Interprofesional que decide el Gobierno. Lo que explica el temor de la CEOE y Cepyme es que la subida de la renta en el conjunto de la economía lleve a los sindicatos a pedir que, a su vez, suba el salario mínimo de convenio, como efecto rebote en el sector privado.

No hay que olvidar que CCOO y UGT llevan tres años reivindicando que el salario mínimo de todos los sectores, tanto en las políticas públicas como en las privadas, sea de 1.000 euros mensuales, y 14.000 anuales, con catorce pagas. El SMI lleva dos años en 950 euros mensuales que, por catorce pagas, son 13.300 euros

No parece muy coherente prorrogar los ERTE para ayudar a las pymes y obligarles a una subida adicional de los salarios

anuales. Bien es verdad que entre 2018 y 2020 el SMI subió más de un 30%, y pasó de 735 a 950 euros mensuales. Sin embargo, la crisis sanitaria y su recesión económica han hecho que los sindicatos conviertan a la subida del SMI en una de sus reivindicaciones más urgentes, junto a la derogación de las reformas del mercado de trabajo y de las pensiones que el hizo el Gobierno del PP.

Item más, los salarios pactados en convenio están subiendo una media del 1,55%, y es muy posible que haya una aceleración de la negociación colectiva ante el crecimiento notable de la inflación. En estos momentos está en una tasa interanual del 2,7%, la cota más alta desde febrero de 2018. Por lo tanto, quienes están sujetos a la renta mínima sí se están quedando atrás, en contra de lo que dice el Gobierno hasta la saciedad.

Es en este contexto de crisis y de pérdida de poder adquisitivo en el que Díaz ha retomado su pulso sobre el SMI con su jefa, Nadia Calviño, vicepresidenta Segunda y responsable de la política económica. Ya, a principios de año, Calviño recabó el apoyo del presidente, Pedro

Sánchez, para frenar el empeño de Díaz. Junto a los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, formaron un frente contra Díaz, que es la cabeza de Unidas Podemos en el Gobierno.

La verdad es que no parece muy coherente hacer cinco prórrogas de los ERTE para intentar salvar empresas y empleo y, a su vez, plantear una subida directa e indirecta de los salarios, desde 950 a 1.000 euros. Y, más, si también sube el gasto de las administraciones públicas. Sin embargo, también es verdad que el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y UP se compromete a subir el SMI hasta el 60% del salario medio en España. Es decir, hasta unos 1.200 euros mensuales. Y, si no hay una subida este año, quedarán pendientes 250 euros en dos ejercicios, en medio de la recuperación tras la crisis del coronavirus. Bien es verdad que, en vísperas de las elecciones generales, como puede ocurrir en dos años, si no antes, Sánchez es capaz de cualquier cosa con tal de seguir disfrutando de los obviales del poder, y pedir un esfuerzo adicional a las pequeñas empresas.